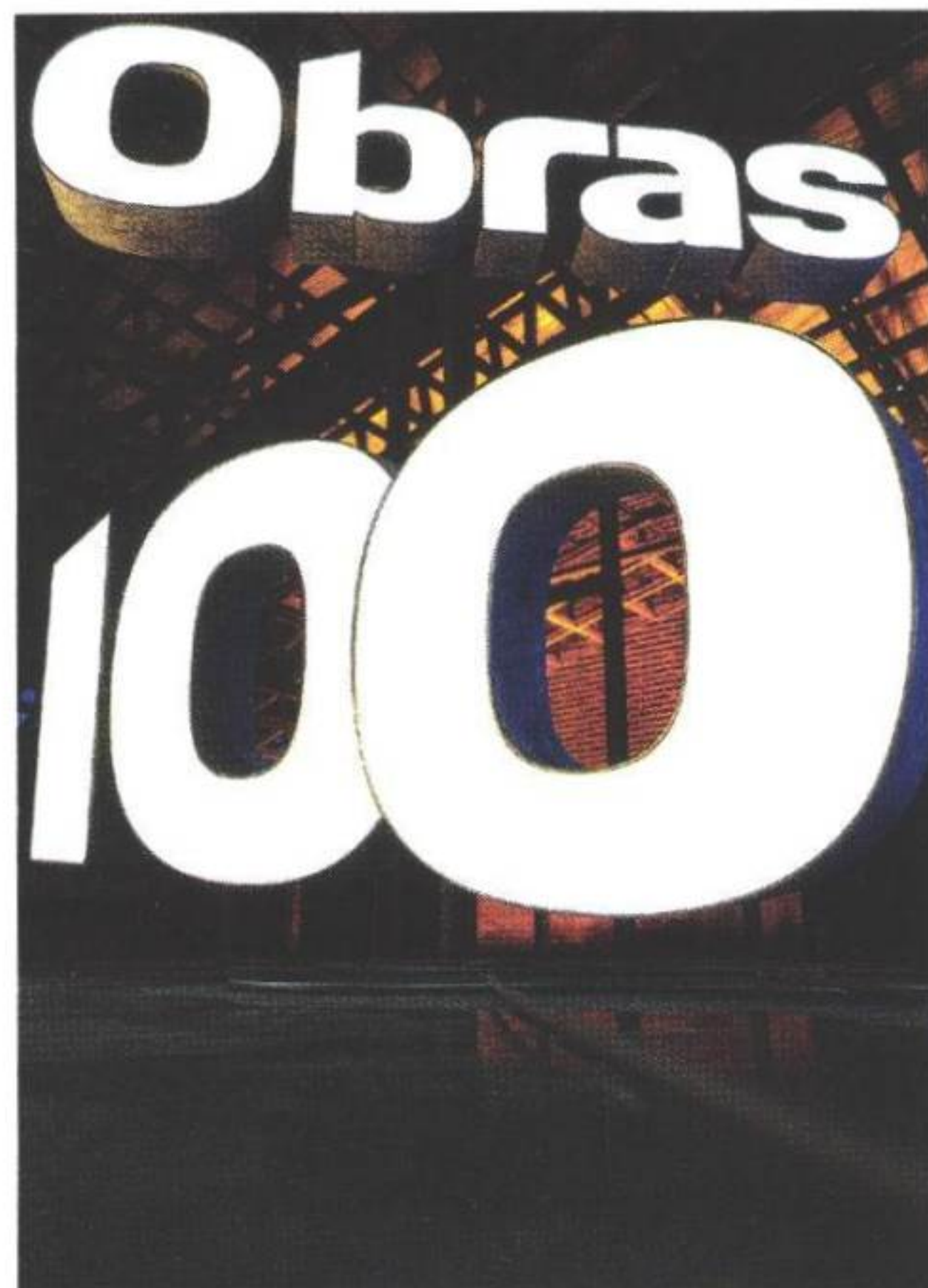


## Editorial



**ILUSTRACIÓN 3D:**  
DANIEL VARELA

# Incentivos inversos

Una forma de identificar una economía saludable es la fortaleza de su infraestructura y de su desarrollo inmobiliario. Hay, por lo menos, tres buenas razones: 1) Al tratarse de industrias de grandes inversiones, que requieren capital intensivo y de tiempos largos de realización, nadie en su sano juicio se metería a un negocio que tarde meses –si no son años o décadas– en generar retornos. 2) Una economía con desarrollo inmobiliario fuerte es sinónimo de un alto nivel de confianza en el gobierno y sus leyes. 3) Una economía sana genera una gran revolvencia de proyectos por la circularidad de su derrama, que se refleja de inmediato en generación de empleo y demanda de productos y servicios en más de la mitad de las actividades económicas del país.

Cada año, en el Informe Obras 100 lanzamos una mirada a los resultados del año previo de las empresas involucradas en la industria. La fotografía de 2018 arroja el despunte del desarrollo turístico (AMResorts y Vidanta, en los primeros cinco lugares); las administradoras de inmuebles o concesiones sobrepasan a las precursoras de desarrollo inmobiliario, vivienda e infraestructura. Además, hoy son empresas multinacionales las que lideran el listado.

El resultado del primer año de ejercicio en el poder de la nueva administración –de facto, desde el 2 de julio, y oficial, desde el 1 de diciembre– arroja el desempleo de más 1.5 millones de trabajadores de la construcción, la parálisis de cientos de proyectos inmobiliarios (sólo en la Ciudad de México hay 496 proyectos clausurados o suspendidos), la interrupción de infraestructuras de gran escala, como el aeropuerto de Texcoco, el tren México-Toluca o la planta termovalorizadora de residuos.

Frente a la promesa “Por el bien de todos, primero los pobres” se han propuesto proyectos de infraestructura que poco aportarán al abatimiento de la desigualdad en el ingreso: el Tren Maya, de vocación turística, sólo beneficiará a quienes estén alrededor de sus estaciones (contrario a lo que sucede con carreteras o aeropuertos); ni hablar del aeropuerto de Santa Lucía, que nace con el lastre de haber convertido en deuda pública lo que antes eran los flujos de rentas de Grupo Aeroportuario; hay quien calcula su costo final en 600,000 millones de pesos, casi tres veces lo que hubiera costado el NAIM; en tanto que la refinería de Dos Bocas, además de ir en contra de las necesidades del mercado y de la propia Pemex, ya generó baja en las calificaciones crediticias y cuestionamientos a la confianza para la inversión en el país; traducido en términos de combate a la pobreza, significa que habrá menos empleos, créditos caros, así como menor valor del dinero vía incremento en la inflación, tres elementos letales para la mejora social.

El actual gobierno tiene que cuidar que sus incentivos no resulten inversos a sus intenciones, pues no es frenando la inversión y paralizando la actividad de las empresas como se logra el crecimiento y el empleo.

Por fortuna, aún hay tiempo de evaluar las medidas y mitigar sus efectos iniciales. Habrá que ver si existe la voluntad de avanzar de los objetivos político-electorales a tomar la responsabilidad de trazar las metas y reglas de evolución ‘real’ de una sociedad. Ojalá por el bien de todos, principalmente, de los pobres, que así sea.

– Los editores